

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO
PALMIRA VALLE DEL CAUCA**

Palmira, veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Sentencia TUTELA 1a. Instancia No. 18
Rad. 76-520-31-03-002-2024-00025-00

OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Procede el despacho a resolver la Acción de Tutela formulada por el señor **LUÍS ALFREDO ROA JARAMILLO**, identificado con la cédula de ciudadanía N° **94.314.950**, en nombre propio **contra**, el **DEPARTAMENTO CONTROL COMERCIO DE ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS**, a cargo del señor coronel **MIGUEL ÁNGEL GARCÍA URIBE**. Asunto al cual fue vinculada la **TERCERA BRIGADA con sede en CALI (V.)**, comandada por el señor Coronel **Jairo Arturo Pinzón Gutiérrez**.

DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS

El accionante solicita el amparo de su derecho fundamental de **petición**, según afirma.

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

En su escrito de tutela el accionante adujo que, el día 17/01/2023, envió una petición a la entidad accionada con el fin de que sea exonerado de una multa impuesta por el no pago oportuno del salvo conducto, dado que se encuentra en trámite de devolución de la misma a esa institución, lo cual es necesario para continuar con el trámite de devolución a la institución, protocolo señalado por funcionarios del departamento y de la Tercera Brigada del Departamento, en la ciudad de Cali.

Expresa que, le indicaron en las diferentes comunicaciones presenciales, vía llamada telefónica y correos electrónicos, que para avanzar en su proceso es necesaria una carta

de transporte ya que el salvo conducto para porte se encuentra vencido, y se hace necesario para trasladarla de su lugar de residencia, el cual solo se le daría una vez sea bajada la multa del sistema.

Afirma que solicitó al coronel Jefe de Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, el permiso en mención, sin embargo a la fecha ni la institución, ni la persona a cargo se han comunicado para dar respuesta a la solicitud, así como tampoco se encuentran diligencias adelantadas en el portal al cual se elevó la petición.

Por lo anterior acude al trámite que nos ocupa solicitando se ordene a la parte accionada Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, dar respuesta a lo solicitado, y la aprobación de la exoneración de la multa para seguir adelantando el trámite de devolución del arma de fuego.

PRUEBAS

La parte accionante con su escrito de tutela aporta fotocopia de: **1.** Derecho de petición dirigido al Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, enviado a través del correo electrónico.

TRÁMITE Y RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA Y VINCULADOS

El despacho por medio de providencia del 13 de febrero de 2024 asumió el conocimiento de la presente acción, ordenando la notificación del accionado y vinculado, para que previo traslado del escrito de tutela, se pronunciaran sobre los hechos narrados y ejercieran su derecho de defensa, efectuándose la notificación por correo a ítem 06.

A ítem **06 el DEPARTAMENTO CONTROL COMERCIO DE ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS**, informó que, la seccional No. 73 Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, con sede en Cali, dio respuesta al accionante de forma directa, teniendo en cuenta que el accionante inició proceso en esa seccional.

A ítem **07 la TERCERA BRIGADA DE CALI (V.)**, indicó que, verificado el Sistema de Información de Armas, Explosivos y Municiones SIAEM 2.0, lograron constatar que efectivamente el accionante se encuentra realizando un trámite de devolución de armas de fuego mediante la plataforma del DCCAЕ, no obstante, no se encuentra ningún trámite de autorización de transporte que haya efectuado, ni alguna solicitud por escrito realizada a la Seccional Control Comercio de Armas No. 73 (Cali).

Manifiesta que, buscando dar solución de fondo al ciudadano, teniendo en cuenta que es un tema de su competencia, le brindaron respuesta al accionante frente a las pretensiones efectuados en el escrito, mediante el oficio No. 0207 de fecha 14/02/2024, en el cual se citan al señor Roa Jaramillo, a la Seccional en mención, con el fin ofrecer la asesoría pertinente.

Afirma que, el accionante asiste a la cita el día 20/02/2024, donde le informa que su trámite de devolución voluntaria de armas se encuentra activo y que al verificar los documentos propios del trámite lograron constatar que uno de ellos presentaba un error, por lo que devolvieron el trámite a la bandeja del ciudadano ,en aras de que el documento fuera corregido y cargado nuevamente en la plataforma.

Expresa que una vez, el proceso de cargue documental quede totalmente aprobado, podrá realizar la solicitud de autorización de transporte, ya que sin dicha aprobación no es posible expedir el oficio correspondiente, señala que enviaron al accionante el oficio No. 0220 de fecha 21/02/2024, en el que le indica lo expuesto en los párrafos anteriores, dando con ello solución de fondo a sus requerimientos.

Concluye expresando que, narra el accionante que se encuentra pendiente por resolver un trámite de exoneración de multa, por lo que informan que el mismo ya se encuentra aprobado por la autoridad competente, y los oficios en mención fueron remitidos al correo electrónico Luisroaj123@gmail.com. Culmina solicitando se nieguen las pretensiones por hecho superado de conformidad a las respuestas otorgada al peticionario.

CONSIDERACIONES

LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA: El accionante, es persona natural por lo tanto se encuentra legitimado por activa para hacer uso de esta acción Constitucional prevista en el artículo 86 de la Constitución Nacional.

En cuanto hace referencia a la legitimación por la parte pasiva se debe anotar que en la medida en que el **DEPARTAMENTO CONTROL COMERCIO DE ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS**, es la destinataria de la solicitud base de este asunto es por lo que resulta legitimada por pasiva para ser parte dentro de este trámite judicial.

LA COMPETENCIA: Le asiste al despacho de conformidad con el artículo 86 constitucional y el 1º del Decreto 333 de 2022.

EL PROBLEMA JURÍDICO: Le corresponde a este despacho entrar a determinar: ¿si es procedente amparar el derecho fundamental de petición invocado por el accionante? y de

ser así precisar las órdenes a emitir para hacer efectivo el amparo solicitado. Ante lo cual se responde desde ya en sentido **negativo** por las siguientes razones:

1. Recordemos que la Acción de tutela (art. 86), se encuentra establecida en nuestra Constitución Política de 1991 y se encaminó a la protección por vía judicial de los derechos fundamentales previstos en el título II, capítulo 1 de dicho estatuto, que se encontraran amenazados o agraviados, y a la vez se encomendó su salvaguarda a la Corte Constitucional, quien tuvo a bien desarrollar dicha norma, para indicar que se trata de amparar los derechos fundamentales, incluso aquellos previstos en otros apartes de la Carta Política y que resultaren fundamentales por conexidad, v.gr. la salud, la dignidad humana. Posteriormente determinó esa Corporación, mediante sentencia **T-760 de 2008** que los llamados derechos fundamentales por conexidad, lo son realmente de forma directa, por ser inherentes a la dignidad de la persona, lo cual legitima que en este expediente nos ocupemos de los invocados por la parte accionante.

2. El requisito de inmediatez en la presentación de la acción de tutela. El principio de inmediatez concebido como un requisito de procedibilidad¹ de la acción de tutela, si bien, ha sido producto del desarrollo jurisprudencial en la materia, -puesto que, *el artículo 86 superior, no establece propiamente un término de caducidad o prescripción para la acción de tutela*²- explicando o determinando para cada caso concreto *"el período de tiempo prudencial desde que se presenta la conducta que presuntamente vulnera los derechos del accionante a la fecha de interposición de la acción"*³.

Al respecto la Corte Constitucional en este sentido ha expresado lo siguiente⁴:

"El principio de inmediatez constituye un requisito de procedibilidad de la acción de tutela, por lo que su interposición debe ser oportuna y razonable con relación a la ocurrencia de los hechos que originaron la afectación o amenaza de los derechos fundamentales invocados. La petición ha de ser presentada en un tiempo cercano a la ocurrencia de la amenaza o violación de los derechos. Si se limitara la presentación de la demanda de amparo constitucional, se afectaría el alcance jurídico dado por el Constituyente a la acción de tutela, y se desvirtuaría su fin de protección actual, inmediata y efectiva de tales derechos.

Por lo tanto, la inactividad o la demora del accionante para ejercer las acciones ordinarias, cuando éstas proveen una protección eficaz, impide que resulte procedente la acción de tutela. Del mismo modo, si se trata de la interposición tardía de la tutela, igualmente es aplicable el principio de inmediatez, según el cual la falta de ejercicio oportuno de los medios que la ley ofrece para el reconocimiento de sus derechos no puede alegarse para el beneficio propio del sujeto de la omisión o la tardanza".

¹ Corte Constitucional, sentencia T-332 de 2015. M.P. Alberto Rojas Ríos.

² Corte Constitucional, sentencia T-117 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

³ Ver sentencias SU-961 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-245 de 2015, M.P. Martha Victoria SÁCHICA Méndez; T-036 de 2017 M.P. Alejandro Linares Cantillo.

⁴ Sentencia T-431 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

Bajo este concepto cabe indicar que la finalidad de la tutela como vía judicial de protección inmediata y expedita de los derechos fundamentales, acorde a su naturaleza implica verificar el lapso transcurrido entre el hecho u omisión generadora del daño o amenaza a un derecho fundamental y la petición de amparo solicitada al juez constitucional, ya que acorde con lo previsto en la jurisprudencia, un lapso amplio injustificado puede revelar que la protección que se pide o pretende no es urgente, y si ello fuere así entonces no se amerita conceder la tutela, dado su carácter subsidiario.

Al respecto con relación al presente asunto cabe manifestar que el requisito en mención se cumple toda vez que entre la fecha de presentación de la solicitud que el accionante refiere no se había contestado y la fecha de interponer la presente acción judicial el lapso promedia de un mes.

3. El principio de subsidiariedad. En atención al mandato contenido en el decreto 2591 e 1991, artículo 6, numeral 1, en donde se dispone el carácter supletivo de la presente acción, lo cual implica que no fue prevista para resolver controversias, para las cuales ya existe otro mecanismo judicial de defensa idóneo, se debe señalar que en tratándose de una solicitud no atendida, la acción tutela sí viene a ser el medio ideal para alcanzar su solución, dada su brevedad.

4. El derecho fundamental de petición invocado por el accionante se encuentra reconocido como fundamental en nuestra Constitución Política en el artículo 23, que “constituye una herramienta determinante para la protección de otras prerrogativas constitucionales como son el derecho a la información, el acceso a documentos públicos, la libertad de expresión y el ejercicio de la participación de los ciudadanos en la toma de las decisiones que los afectan.⁵”, de modo que resulta pertinente entrar a considerar si se da su afectación dentro de este asunto.

Este derecho fundamental de petición fue desarrollado mediante la **ley 1755 del 30 de junio de 2015 por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo**, que lo es la ley 1437 de 2011 conocida en el argot

⁵ En la Sentencia T-596 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, la Corte Constitucional recalcó la importancia del derecho de petición, como mecanismo de participación ciudadana en el funcionamiento de las entidades públicas, en los siguientes términos: “En materia del ejercicio del poder político y social por parte de las personas, la Constitución de 1991 representa la transferencia de extensas facultades a los individuos y grupos sociales. El derecho a la igualdad, la libertad de expresión, el derecho de petición, el derecho de reunión, el derecho de información o el derecho de acceder a los documentos públicos, entre otros, permiten a los ciudadanos una mayor participación en el diseño y funcionamiento de las instituciones públicas. Los mecanismos de protección de los derechos fundamentales por su parte han obrado una redistribución del poder político en favor de toda la población con lo que se consolida y hace realidad la democracia participativa.”

judicial como CPACA, modificada por la ley 2080 de 2021, de modo que este último tiene incorporado un título II dentro del cual encontramos el art. 14 que dice:

"Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. *Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:* 1. *Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.* 2. **Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción".** Negrillas del Juzgado

Luego, si pasado el término legal el cual corre después de la presentación de la petición, la administración destinataria del mismo no hubiere resuelto de fondo el asunto acá planteado, se evidencia la afectación del derecho fundamental de petición.

Según la jurisprudencia constitucional toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas, ante las autoridades, y de allí se desprende el correlativo derecho a obtener respuesta, esto de acuerdo con la norma constitucional (art. 23), y en ese sentido la jurisprudencia de la Corte Constitucional mediante la sentencia T603 de 2007, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, acerca del derecho de petición, expresó que la respuesta que se dé al peticionario debe cumplir a lo menos los siguientes requisitos:

"1. Ser oportuna; 2. Resolver de fondo, en forma clara, precisa y de congruente con lo solicitado; 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumplen con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional de petición".

Además, esa Corporación sostiene⁶ en lo atinente con el derecho de petición "el núcleo esencial del derecho fundamental de petición entraña la resolución pronta y oportuna de lo solicitado, pues carecería de sentido dirigirse a las autoridades si éstas no deciden o, habiendo adoptado la determinación correspondiente, se abstienen de comunicarla al interesado."

5. Bajo el anterior contexto, se pasa a cotejar los planteamientos de las partes con la información obrante en este plenario, así resulta que, a través del informe secretarial ítem 08, esta instancia supo que, el Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y

⁶ Corte Constitucional. Sentencia T-139 de 2009 M.P. Mauricio González Cuervo

Explosivos, y la Tercera Brigada de Cali (V.), le dieron respuesta a lo solicitado por el accionante.

A su vez a ítem 6, folio 4, y ítem 07 folios 04 al 07 del expediente se ve que la accionada y vinculada ya dieron respuesta a lo solicitado. Que si bien como lo precisa la parte accionada existía una deficiencia en uno de los documentos pertinentes lo cual ameritaba su corrección, lo cierto es durante el desarrollo del presente trámite judicial, dichas autoridades se mostraron proactivas en definir el tema propuesto por el ciudadano, lo cual dio lugar a que el procedimiento militar culminara. Por eso, se debe asumir que la vulneración del derecho de petición e incluso del debido proceso que aunque no fue invocado, sí se avizora, no existe, por eso no es posible proteger dicho bien jurídico.

6. De acuerdo a las exposiciones realizadas, se tiene que el trámite que estaba pendiente y por el cual tuvo su génesis la presente acción constitucional, ya fue emitido. Es decir, con la decisión adoptada por el Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, y la Tercera Brigada de Cali (V.), se ha dado cumplimiento a lo pedido. Hasta aquí lo dicho, se debe señalar que, como quiera que la entidad accionada ya dio trámite a lo solicitado y, se ocupó de dar la correspondiente respuesta a lo solicitado, dio lugar a solucionar dicha situación y a la configuración de lo que la jurisprudencia Constitucional ha llamado como **"hecho superado"**, sobre lo cual la Corte ha sido enfática en señala⁷:

"Se presenta pues en el caso bajo estudio, el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado, según el cual, como quiera que la finalidad de la acción de tutela es garantizar la protección del derecho fundamental de quien acude al amparo constitucional, entonces dicha finalidad se extingue al momento en que la vulneración o amenaza cesa, porque ha ocurrido el evento que configura tanto la reparación del derecho, como la solicitud al juez de amparo. Es decir, aquella acción por parte del demandado, que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela, ha acaecido antes de la mencionada orden. Al respecto se ha afirmado que existiendo carencia de objeto "no tendría sentido cualquier orden que pudiera proferir esta Corte con el fin de amparar los derechos del accionante, pues en el evento de adoptarse ésta, caería en el vacío por sustracción de materia."

Así las cosas, se tiene que, la situación fáctica que originó la presente acción ya no es actual, es decir que el hecho se ha superado. Por lo tanto, la inmediata y eficaz protección al derecho fundamental, que es el objetivo primordial de la acción consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, carece de la actualidad. Debe entenderse como cosa lógica que no resulta viable conceder un amparo para ordenar que se haga algo que ya fue realizado

⁷ Sentencia T-431/13. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

Sin más comentarios con base en lo expuesto, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Palmira (V.), **administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,**

RESUELVE:

PRIMERO: NO TUTELAR el derecho fundamental de petición, invocado por el señor **LUÍS ALFREDO ROA JARAMILLO,** identificado con la cédula de ciudadanía **Nº 94.314.950,** en nombre propio **contra,** el **DEPARTAMENTO CONTROL COMERCIO DE ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS,** a cargo del señor coronel **MIGUEL ÁNGEL GARCÍA URIBE.** Asunto al cual fue vinculado la **TERCERA BRIGADA DE CALI (V.),** comandada por el señor Coronel **Jairo Arturo Pinzón Gutiérrez,** conforme a las exposiciones hechas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito, conforme a lo previsto en el art. 31 del decreto 2591 de 1.991 indicando que contra esta decisión procede el recurso de **impugnación que puede ser interpuesta dentro** de los **tres días siguientes** al de la notificación de este proveído mediante mensaje enviado al correo: **j02ccpal@cendoj.ramajudicial.gov.co** ó, en forma presencial en la sede del juzgado.

TERCERO: De no ser impugnada esta decisión dentro de los tres días siguientes al de la notificación, en forma física o virtual, **REMÍTANSE** este expediente, por secretaría, oportunamente a la Corte Constitucional para su eventual **REVISIÓN** conforme al término previsto en el art. 31 del decreto 2591 de 1.991.

CÚMPLASE,

LUZ AMELIA BASTIDAS SEGURA

Juez

Firmado Por:

Luz Amelia Bastidas Segura
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 002
Palmira - Valle Del Cauca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5c2eba99c4ccbba01d6d7af7066bb6869c9df3b81100932d2321fdeed70e1f82**

Documento generado en 22/02/2024 03:55:46 p. m.

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>